PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO PENAL

MENCION DERECHO PROCESAL PENAL

TRABAJO DE TITULACION

TEMA:

EL LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE CÓMO LLEVA LA INVESTIGACIÓN FISCALÍA EN UN DELITO COMETIDO EN LA CIUDAD DE OTAVALO.

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE MAGISTER EN DERECHO PENAL MENCION DERECHO PROCESAL PENAL

AUTORES:

AB. LEIDY MASSIEL GOMEZ SIERRA

AB. SANTIAGO VINICIO JÁCOME VALLEJO

TUTOR/A: DR. SEGUNDO RAFAEL CHIMBORAZO CHACHA, MSc.

OTAVALO, OCTUBRE 2023

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Nosotros, AB. LEIDY MASSIEL GOMEZ SIERRA y AB. SANTIAGO VINICIO JACOME VALLEJO, declaramos que este trabajo de titulación es de nuestra total autoría y que no ha sido previamente presentado para grado alguno o calificación profesional.

La Universidad de Otavalo puede hacer uso de los derechos correspondientes, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la normativa institucional vigente.



AB. LEIDY MASSIEL GOMEZ SIERRA

C.I. 1004822498



AB. SANTIAGO VINICIO JACOME VALLEJO

C.I. 1003697941

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Certifico que el trabajo de investigación titulado "**EL LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE CÓMO LLEVA LA INVESTIGACIÓN FISCALÍA EN UN DELITO COMETIDO EN LA CIUDAD DE OTAVALO**" fue desarrollado bajo mi dirección y supervisión, para aspirar al título de Magister en Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal, de los estudiantes AB. LEIDY MASSIEL GOMEZ SIERRA y AB. SANTIAGO VINICIO JACOME VALLEJO; y cumple con las condiciones requeridas por el programa de maestría.

SEGUNDO RAFAEL CHIMBORAZO CHACHA

Firmado digitalmente por SEGUNDO RAFAEL CHIMBORAZO CHACHA
Fecha: 2024.06.10 12:58:46 -05'00'

DR. SEGUNDO RAFAEL CHIMBORAZO CHACHA

C. C. 1802493682

DEDICATORIA

Dedicamos esta investigación en conjunto principalmente a Dios, por guiarnos de la mejor manera para poder desarrollar está investigación y terminar este reto que nos hemos planteado.

A nuestros padres, por ayudarnos y motivarnos para salir adelante.

Y, finalmente, a la Universidad que por impartir buenos conocimientos con los mejores profesionales.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos principalmente a nuestro tutor, por su dedicación, paciencia y sobre todo por guiarnos paso a paso durante la investigación que se iba planteando, por ser parte del desarrollo de la investigación y por ayudarnos con ciertas estrategias que estaban a su alcance. En segundo lugar, agradecemos a las personas que nos brindaron su tiempo y su cooperación para el desarrollo de la metodología planteada en nuestra investigación.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ii
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR iii
DEDICATORIA iv
AGRADECIMIENTO iv
ÍNDICE DE CONTENIDOS v
ÍNDICE DE TABLAS v
EL LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE CÓMO LLEVA LA INVESTIGACIÓN FISCALÍA EN UN PRESUNTO DELITO COMETIDO EN LA CIUDAD DE OTAVALO vi
RESUMEN vi
ABSTRACT vii
INTRODUCCIÓN 1
METODOLOGÍA 4
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 5
Evolución del Control del Lavado de Activos en la Legislación Ecuatoriana 14
Revisión del proceso 10282-2019-00968 relacionado con el tema de estudio del presente artículo de investigación 15
Resultados de las entrevistas 24
DISCUSIÓN 25
CONCLUSIONES 27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 28
ANEXO 30
Anexo 1. Entrevistas. 30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Denuncias y sentencias por lavado de activos en Ecuador (2010-2014) ***¡Error! Marcador no definido.***

EL LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE CÓMO LLEVA LA INVESTIGACIÓN FISCALÍA EN UN PRESUNTO DELITO COMETIDO EN LA CIUDAD DE OTAVALO

AUTORES: Ab. Leidy Massiel Gómez Sierra[*]

Ab. Santiago Vinicio Jácome Vallejo[**]

TUTOR: Dr. Segundo Rafael Chimborazo Chacha

RESUMEN

El lavado de activos se configura como un delito de incidencia global y es uno de los que más daño provoca en la sociedad por estar vinculado a actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, la minería ilegal, el tráfico de armas, entre otros, cuya inyección de dinero ilegal en la economía genera serias distorsiones y desequilibrios en el sistema económico-financiero de un país, afectando bienes jurídicos fundamentales tutelados por el Estado como el bienestar económico y social de sus habitantes. Es deber del Estado emprender acciones que permitan detener el avance de este flagelo, especialmente a través del marco jurídico que permita prevenir, detectar y erradicar este delito. Ecuador ha demostrado que está en esa línea de acción mediante la aprobación de leyes y el establecimiento de mecanismos especializados para combatir el lavado de activos. El presente estudio busca evidenciar que factores inciden para que la actuación de la Fiscalía número 2, Quito no sea eficaz, analizando un presunto delito de lavado de Activos cometido en la ciudad de Otavalo, se ha determinado vulneración de derechos de los procesados. El estudio corresponde a una investigación aplicada, de enfoque cualitativo y de nivel descriptivo, desarrollado fundamentalmente mediante la aplicación de los métodos dogmático-jurídico y socio-jurídico, llegando a determinar que, si bien existen importantes avances en materia de combate al delito de lavado de activos, también se evidencias falencias de tipo operativo que afectan los procesos de juzgamiento.

PALABRAS CLAVE: lavado de activos, Fiscalía, marco jurídico, proceso de juzgamiento

[*] Maestrante en Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal por la Universidad de Otavalo
[**] Maestrante en Derecho Penal, mención Derecho Procesal Penal por la Universidad de Otavalo

ABSTRACT

Money laundering is a crime of global incidence and is one of those that causes the most damage in society because it is linked to illicit activities such as drug trafficking, human trafficking, corruption, illegal mining, arms trafficking. . , among others, whose infection of illegal money in the economy generates serious distortions and imbalances in the economic-financial system of a country, affecting fundamental legal assets protected by the State such as the economic and social well-being of its inhabitants. It is the duty of the State to take actions to stop the advance of this scourge, especially through the legal framework that allows the prevention, detection and eradication of this crime. Ecuador has demonstrated that it is in line with action by passing laws and establishing specialized mechanisms to combat money laundering. The present study seeks to demonstrate the factors that influence the actions of the Money Laundering Prosecutor's Office number 2, Quito, in the investigation of the crime of money laundering to be ineffective, analyzing an alleged crime committed in the city of Otavalo to determine alleged violations of the defendant's rights. The study corresponds to an applied research, with a qualitative approach and a descriptive level, developed mainly through the application of dogmatic-legal and socio-legal methods, determining that although there are important advances in combating the crime of money laundering, assets, operational shortcomings that affect the judging processes are also evident.

KEY WORD:

Money laundering, Prosecutor's Office, legal framework, trial process.

INTRODUCCIÓN

La sociedad constituye un sistema que, paradójicamente, a pesar de haber logrado, con el paso del tiempo, un mayor nivel de desarrollo, también se vuelve más compleja en todo su contexto de manera general, como en áreas específicas particulares, de modo que, la búsqueda de la anhelada armonía en la convivencia social se ha convertido en un sueño que, dadas condiciones y situaciones que se viven la actualidad, parece alejarse, precisamente por la complejidad que la sociedad humana representa. Los problemas que cotidianamente se presentan en la sociedad tienden a multiplicarse, y esto conlleva a que el Estado se vea en la necesidad de ampliar sus capacidades de atención y hacer los esfuerzos para que dicha atención sea realmente efectiva.

Dentro de la diversidad problemica de la complejidad social, el comportamiento humano constituye un factor de alta incidencia, de ahí la importancia de la ciencia del Derecho y su orientación a coadyuvar en la búsqueda de soluciones a los problemas que se generan de manera espontánea producto de las dinámicas sociales no controlables y otros que son provocados de manera intencional por un comportamiento humano inadecuado y que afectan la convivencia social, lo que genera la necesidad de recurrir a acciones de control social, control que muchas veces requiere una intervención formal desde el Estado, a través de la aplicación de normas jurídicas, ya que, como lo expresa Villavicencio (2017), el propósito del control social es lograr que el comportamiento de los miembros de una sociedad determinada se produzca acorde con unos principios y reglas establecidos para asegurar la estabilidad, la supervivencia y la convivencia armónica en dicha sociedad.

En este sentido el Estado dispone de la aplicación del derecho, de manera particular del derecho penal, como recurso jurídico para actuar frente al delito, proteger los bienes y preservar en alguna medida la armonía social, a través de los administradores y operadores de justicia y los agentes de control.

En este contexto de complejidad social, los actos de corrupción se presentan como hechos de alta afectación, tanto a los intereses del Estado como al funcionamiento de la sociedad actual, fenómeno que, según De la Torre (2017) “está presente en todos los países y en todos los niveles de la sociedad” (p.15), catalogándose el lavado de activos entre los actos de corrupción de mayor afectación política, económica y social que enfrenta el mundo moderno, por razones que se expondrán más adelante; situación de la cual el Ecuador no está exento y que viene afrontando a través de procedimientos judiciales que buscan prevenir y también sancionar este problema que afecta el buen funcionamiento de la sociedad, no solamente por estar contra las reglas de convivencia, sino porque es un delito, tipificado en la normativa jurídica penal nacional e internacional.

El lavado de activos es un problema con muchas aristas que tiene relación con múltiples actividades, pero, según publicación (Perfil Criminológico) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (2015) está mayormente vinculado al narcotráfico, constituyéndose en “uno de los eslabones más importantes del ciclo del narcotráfico” (p. 3), afirmando que es en el lavado de activos donde se efectiviza este negocio. También se señala que, considerando al narcotráfico una actividad inserta en una economía globalizada e interdependiente, “los delitos adquieren un carácter transnacional” (p.3), lo que de hecho pone mayor complejidad a la problemática y

seguramente a los procedimientos encaminados al control y a su judicialización.

> El lavado genera una emisión monetaria de dinero que distorsiona la economía porque aumenta los precios, produce escasez de una serie de bienes y servicios, enriquece a una minoría, corrompe a las autoridades y amplios sectores de la población. Fortalece además un mercado extra bancario paralelo, sin controles ni límites, sin encajes ni registros (FGE y FLACSO, 2015, p. 3)

La cita que precede permite percatarse de la magnitud y el alcance del lavado de activos, así como de los efectos que provoca o que potencialmente podría provocar. Atender esta problemática constituye una tarea igualmente compleja para el Estado a través de los órganos competentes. En el caso de Ecuador, FGE y FLACSO (2015) señalan que fue a partir del año 2000, de manera paralela al proceso de dolarización, cuando el narcotráfico incrementa sus actividades ilícitas en este territorio, en una suerte de reconfiguración de sus acciones a nivel global que terminaron convirtiendo al Ecuador en "país de lavado de activos" (p. 4), señalando además que, en los últimos años "el país ha tenido un dramático aumento en el contrabando de dinero, que se refleja en prácticas de lavado y tráfico de grandes cantidades de dinero por parte de grupos criminales" (p. 4).

Frente a esta realidad, por demás preocupante, y, atendiendo también el llamado de otros países a trabajar de manera conjunta en la lucha contra el lavado de activos, se establece en Ecuador, a partir de 2005, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en 2016, se constituyó en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), teniendo entre sus funciones las de: *Remitir a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía* y, *cumplir las normas y directrices relacionadas con lavado de activos dispuestas por la Fiscalía General del Estado como órgano directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses* (las cursivas son de los autores).

Asimismo, con el afán de atender los requerimientos de esta problemática, la Fiscalía General del Estado, en octubre de 2014, creó la Unidad Antilavado de Activos, con Resolución reformatoria en 2017, teniendo a su cargo la *investigación de todos los delitos relacionados con lavado de activos tipificados en los artículos 317, 318, 319 y 320 del Código Orgánico Integral Penal* (las cursivas son de los autores). Dentro de este marco, se infiere que hay un esfuerzo institucional a través del cual el Estado aplica la ley para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos, y el presente estudio está dirigido precisamente a conocer los procedimientos investigativos que desarrolla la Fiscalía para un presunto delito de lavado de activos en la ciudad de Otavalo.

¿Por qué llevar a cabo este estudio?

Como se señaló en párrafos anteriores, la corrupción constituye en la actualidad uno de males de mayor afectación a la convivencia social y entre los hechos de corrupción de circunscribe el lavado de activo como uno de los delitos más peligrosos y dañinos por su estrecha vinculación con el narcotráfico y otras actividades delictivas que ponen en riesgo

la integridad de las personas, siendo un potencial destructor del propio tejido social comunitario. Como se expresa en FGE y FLACSO (2015), el lavado de activos genera consecuencias tan negativas como:

> el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, pérdida del control de la política económica, pérdida de rentas públicas y riesgo para la reputación del país. Lo que trae atado la afectación de la Administración Pública en general y las economías lícitas de los Estados y la estructura misma del Estado (p. 12)

Sin duda, existe un interés político, económico y social por el nivel de afectación que el lavado de activos produce y reproduce, de modo que, reviste especial importancia conocer cuáles son los mecanismos legales que desde la administración de justicia se aplican en el tratamiento de este delito, las diligencias que se practican y cómo son sancionados, conociendo además que el tipo penal lavado de activos se ha tipificado como nueva forma de delito específico en el sistema penal ecuatoriano con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) a partir de 2014.

Resulta por tanto indispensable conocer, cómo se manejan en estos casos los operadores de justicia, cómo se operativizan la dogmática jurídico-penal, la política criminal y lo criminológico en torno al lavado de activos en Ecuador; conocer los procedimientos que se implementan desde la Fiscalía: indagación previa, formulación de cargos, la pruebas, así como también el proceso de juzgamiento y el dictamen final de los jueces. Esto permitirá contar con una concepción jurídica clara del rol del Estado en la prevención, detección y erradicación del lavado de activos.

Además de la importancia del acceso a la información y el conocimiento de estos procesos de juzgamiento, resulta que, el presente estudio tiene una connotación profesional importante, en el sentido de que, sus resultados pueden proporcionar argumentos motivacionales para el trabajo en el campo del derecho y particularmente en torno a los delitos vinculados al lavado de activos, considerando no solamente el lado punible de los casos, sino también el trabajo profesional enfocado a la prevención, siendo de vital importancia para quienes se vinculan al trabajo legal en el campo político, en instituciones financieras, en el sector empresarial y en organizaciones humanitarias.

Esta problemática interpone un conjunto de interrogantes: ¿Cómo afecta el lavado de activos en el ejercicio privado de la acción penal ante la sociedad? ¿Cuál es el alcance de la fiscalía para hacer una investigación transparente de lavado de activos sin persecución? ¿Cuáles son las barreras que impiden se aplique la justicia en el lavado de activos? Este artículo científico propone analizar, determinar y explorar a fondo estas interrogantes, cuyas respuestas coadyuvarán en una mejor comprensión de este fenómeno y por tanto una mejor actuación jurídico-profesional.

En el transcurso de la investigación, se examinaron doctrinas, normativas, fundamentos y principios que sostienen el análisis de lavado de activos en materia penal, en cuanto a los desafíos frente a fiscalía. De igual manera se exploran criterios, sugerencias, y recomendaciones basadas en derecho frente al proceso de juzgamiento de delito de lavado de activos. En fin, este artículo pretende contribuir con la sociedad a través del aporte a la

problemática actual de lograr una adecuada canalización de las experticias periciales en materia penal, particularmente en casos de lavado de activos, con las garantías reconocidas en el debido proceso y la correcta defensa de los derechos ante la administración de justicia, sin condición, ni traba alguna; lo que es más, explorando en los criterios de profesionales, experiencias diarias y aprendizajes, estrategias renovadoras, que beneficien al sistema judicial en su afán de impartir justicia.

METODOLOGÍA

La investigación científica en su contexto general es de carácter universal y cuenta asimismo con métodos generales para su desarrollo e implementación, dependiendo de las características propias de cada trabajo, sin descuidar la rigurosidad que toda investigación demanda.

Con relación a los aspectos generales de la investigación y, atendiendo al propósito, la presente es una investigación aplicada, en cuanto se trata de aplicar los procedimientos investigativos universales al campo particular del derecho. Asimismo, considerando la problemática y el objeto que se persigue, la investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que, se proyecta a analizar los procedimientos aplicados en el tratamiento de un caso concreto en un contexto jurídico específico a fin de conocer los resultados derivados de la aplicación de dichos procedimientos.

Por el nivel de profundización del estudio, la investigación es de carácter descriptivo, por cuando se orienta precisamente a la caracterización de una realidad concreta con unos actores específico como parte de esa realidad, a fin de hacer una descripción del contexto que se estudia, así como de las incidencias y resultados de las acciones emprendidas para una cabal comprensión de los hechos y sus principales repercusiones en materia jurídica.

En el aspecto metodológico de la investigación se aplicó, como método general, el inductivo, ya que el estudio recurrirá primero a los hechos particulares del problema para, con base en ellos, llegar a establecer conclusiones generales. También se aplicó el método sintético-analítico, pues hubo la necesidad de llegar a sintetizar en ciertos aspectos del estudio, luego de los respetivos análisis.

Con base en los avances de su propio desarrollo como ciencia, el campo de la investigación “comienza a escindirse en parcelas en ciertas áreas del conocimiento, como lo es la denominada metodología aplicada para las investigaciones jurídicas o el campo del derecho” (Tyler en Mila et al., 2021, p. 82). Significa que, además de los métodos generales de investigación que son comúnmente utilizados, se ha llegado a establecer unos métodos específicamente aplicables al campo del derecho, siendo estos los métodos de mayor interés para el desarrollo de la investigación.

En este contexto, en materia metodológica específica, aplicable al derecho, en la investigación se empleó el método dogmático-jurídico, porque una tarea fundamental del estudio es el análisis interpretativo de la norma jurídica y de las diversas fuentes del derecho

que atañen a la problemática que se investiga. También se aplicó el método socio-jurídico, debido a que el tema que se aborda está estrictamente ligado a una problemática social (lavado de activos) que ha cobrado relevancia por estar vinculado a actos de corrupción y particularmente al narcotráfico y que amerita por tanto un análisis que interrelaciones lo jurídico y lo social.

Una de las técnicas empleadas fue la entrevista, específicamente en investigación de campo, para la obtención de información sobre opiniones y posturas relacionadas con las acciones emprendidas por la Fiscalía en el caso concreto de análisis de lavado de activos en la provincia de Imbabura, involucrando personas inmersas en el sistema de justicia y profesionales del derecho.

Otra técnica utilizada fue la revisión documental, pues se debió analizar tratados internacionales, la legislación ecuatoriana, y doctrina de juristas que han escrito sobre el delito de lavado de activos, para dotar a la investigación de información y datos necesarios para una adecuada fundamentación teórica.

En lo que concierne a los instrumentos, se utilizaron el registro de investigación esencial para el seguimiento y monitoreo de la misma y el cuestionario de manera específica para las entrevistas.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El lavado de activos es uno de los delitos que en los últimos años se ha incrementado en nuestro país, como resultado de la degradación de la sociedad que busca cada vez generar mayores ingresos económicos realizando actividades alejadas de la legalidad por lo que constituye una verdadera amenaza para la solidez de la economía de los países sobre todo de aquellos denominados “en vías de desarrollo” en donde el control estatal de esas actividades ilícitas aún es deficiente.

De la Torre (2017), en su artículo titulado: Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria, el autor se propone demostrar que el estudio del lavado de activos es incompleto si no va relacionado con los paraísos fiscales y la defraudación tributaria. Señala que el lavado de activos tuvo sus inicios en los años 20 del siglo pasado con el tráfico prohibido de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, una actividad que movía importantes sumas de dinero de manera ilegal, pero que esta actividad ilícita tuvo su verdadero auge en los años 70 del siglo pasado con el comercio ilegítimo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes que ingresaban a los Estados Unidos, generando la preocupación mundial por el blanqueo de grandes cantidades de dinero producto de esta actividad. Citando a Marengo, manifiesta que de esta actividad surgieron “poderosas organizaciones transnacionales que pronto extendieron su modalidad delictiva por diversas regiones del mundo” (p. 17), motivando la convocatoria de convenciones internacionales para tratar el tema y generando asimismo leyes contra el blanqueo de dinero y la supervisión financiera. Entre las conclusiones, el autor señala que:

Existe una constante combinación entre paraísos fiscales, defraudación tributaria y

el lavado de activos y que, los paraísos fiscales, "son considerados como territorios de competencia fiscal perjudicial y, potencialmente, como centros de blanqueo permanente, especialmente por la opacidad que les caracteriza, escasa o casi nula disposición al intercambio y entrega de información" (p. 30). También concluye que,

> La modificación realizada al artículo 298.- Defraudación tributaria, del COIP está incluida en la emisión de la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos expedida en julio 2016, incluyendo sanciones a quienes utilicen centros offshore con la finalidad de evasión tributaria. Además, se incluye la responsabilidad directa del contador como autor en la defraudación, inclusive si no ha actuado con mandato expreso.

Se hace referencia también a uno de los documentos más destacados para los fines de esta investigación en torno al lavado de activos. Tiene que ver con el Perfil Criminológico de FGE y FLACSO (2015), en el que se analizan, a través de varios autores algunos aspectos relacionados con el tema. En el documento se señala que, fue durante el Gobierno de George W. Bush I (1989-1992) en que un tema poco visibilizado hasta ese momento, pasó a convertirse en parte integrante del discurso de Estados Unidos en torno al combate a las drogas, convirtiéndose en "uno de los problemas prioritarios de la agenda de Washington: el lavado de dinero" (p. 14).

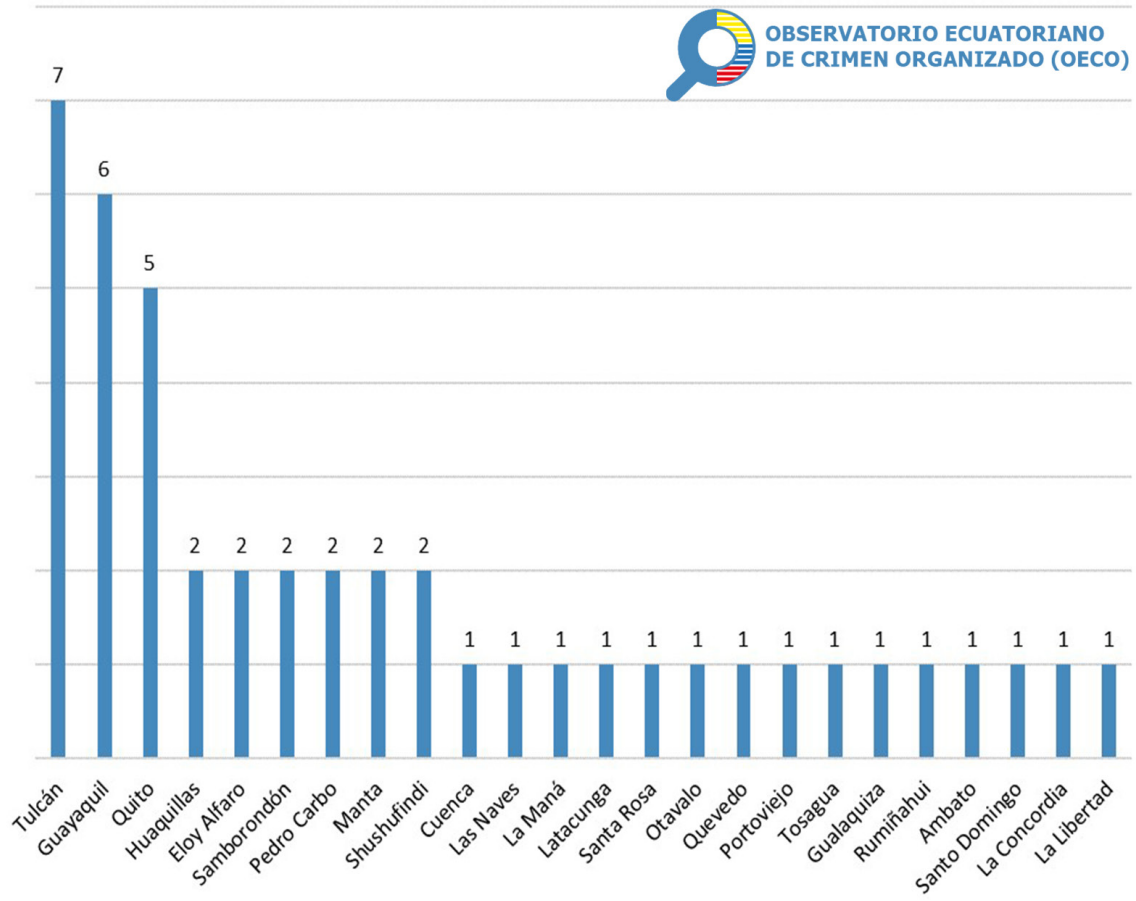
También se manifiesta que, el control del lavado de activos viene a convertirse en una prioridad en el marco del combate a las drogas, a partir de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena en diciembre de 1988 y que, en este mismo año "EE.UU. lleva a la reunión del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Toronto, una propuesta contra el lavado de dinero, que crea el Financial Action Task Force, presentando luego, con ocasión de una reunión en París, en febrero de 1990, "cuarenta recomendaciones sobre esa materia" (p. 14). De esta manera, se enfatiza que, 1990 se convierte en,

> "…el año clave para introducir esta preocupación en el continente americano con ocasión de la Declaración y Programa de Acción de Ixtapa, México, donde se enfatiza la necesidad de legislar para tipificar como delito las actividades relacionadas con el lavado de dinero. Igualmente, la Conferencia del Caribe sobre lavado de dinero que se celebraría, a principios de junio, en Aruba, para endosar las cuarenta recomendaciones de París…"

De acuerdo con el documento en referencia, 1990 se convierte en una especie de punto de partida de una serie de esfuerzos encaminados a convertir el lavado de activos en un problema prioritario y tema central en la discusión de posteriores conferencias y firmas de convenios bilaterales, siendo Venezuela (1990) y Perú (1991) los primeros países de la región en suscribir estos convenios con Estados Unidos. Se destaca que, en 1991 "la DEA (Drug Enforcement Administration) estaba preparando a 75 expertos en asuntos bancarios para asistir a los países de América Latina a fin de evitar el lavado de dinero" (Olmo, citado en FGE y FLACSO, 2015, p. 14).

Distribución de causas por lavado de activos a nivel cantonal

Número total de causas, periodo 2020 - 2022





Fuente: Fiscalía General del Estado.

El levantamiento individualizado de la temporalidad desde el ingreso de la causa en casos de calificación de la legalidad de la detención, o desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de juicio relacionados al delito de lavado de activos determinó que:

El promedio de resolución en un caso de lavado de activos, indistintamente de la resolución obtenida, fue de 7 meses y 5 días. Este tiempo es bajo, debido a que un 45% de los casos en los que se obtuvo información (18) se resolvieron dentro de 24 horas por ser detenciones por situaciones de aparente flagrancia en las que la Fiscalía no formuló cargos por considerar que no se configuró la conducta punible.

En el 32,5% de los casos (13) en los que se formularon cargos y se obtuvo una resolución, el tiempo transcurrido fue de 14 meses y 20 días.

En el 20% (8) de casos que todavía no tienen resolución respecto a alguno de los procesados, continúan en trámite por un tiempo que supera los 16 meses.[6]

En el 2,5% (1), el caso estuvo en trámite por 75 días, tras lo cual la Fiscalía retiró el pedido de formulación de cargos.
Adicionalmente, entre 2020 a 2022 se observa que el número de causas sin resolver aumentó, lo que podría tener un impacto sobre los tiempos de resolución. Sin embargo, de acuerdo con el número de ingresos respecto del delito de lavado de activos en la Fiscalía General del Estado, el número de investigaciones desde 2020 disminuyó cada año.

En cuanto a la participación por provincias en el lavado de activos, se destaca que Pichincha y Guayas abarcan el 77% de la actividad en el país, con el 39% y 38%, respectivamente, seguidos de lejos por Carchi (6%) y El Oro (5%).

En otra parte del documento, FGE y FLACSO hacen referencia al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), [organismo intergubernamental internacional creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G7)] (el corchete es de los autores), indicando como una responsabilidad importante de la UAFE la de sacar a Ecuador de la lista de países identificados por este organismo como "países con deficiencias estratégicas que no han hecho suficientes progresos o no se han comprometido con un plan para subsanar las deficiencias" (p. 9). Es preciso indicar que, gracias a los esfuerzos realizados por la UAFE, en junio de 2015 Ecuador fue excluido de la lista en mención.

Se menciona también la tipificación del delito de lavado de activos en la Sección Octava Delitos Económicos del Código Orgánico Integral Penal, recordando que "existen bienes jurídicos protegidos por cada delito precedente, así como la afectación causada a la administración de justicia por la dificultad de descubrir autores o cómplices de los delitos precedentes" (p. 10) y señalando que "en materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el sistema especializado integral de investigación, conforme a la Constitución, en concordancia con los artículos 448, 449 y 450 del Código Orgánico Integral Penal" (p. 10).

> En la actualidad Ecuador a fin de cumplir con las recomendaciones del GAFI incorpora el tipo penal en el COIP (Código Orgánico Integral Penal): en el capítulo V del primer libro, que trata de los delitos contra la responsabilidad ciudadana, en la sección 8va. "De los delitos Económicos" (Art. 317 al 320) Se establecen como sanciones penas privativas de libertad: de uno a tres años; de cinco a siete años, de siete a diez años y hasta penas de diez a trece años, tanto como el decomiso de los medios, instrumentos y resultado del delito. Así como también la persecución y sanción de la persona jurídica (FGE y FLACSO, 2015, p. 12)

Otro documento que se destaca es la investigación de Calvache (2015), en su tesis

de maestría titulada: "Análisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana para detener el delito de lavado de activos", a través de la cual se plantea determinar si estos mecanismos son adecuados y suficientes para hacerle frente a este delito; haciendo énfasis en la prevención más que en la sanción, e identificar cuáles son los mejores mecanismos para el control eficiente del delito de blanqueo de capitales.

Citando a Vernaza, Calvache (2015) define que, el lavado de dinero es "el proceso mediante el cual ingentes y considerables sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas y criminales son transportadas, transferidas, convertidas, negociadas o mezcladas con fondos legítimos, con el propósito y fin de ocultar su verdadero origen" (p. 11). Hace referencia a Lombardero para señalar que "el fenómeno del blanqueo de capitales presenta tres características esenciales: mueve enormes sumas de dinero, utiliza técnicas sofisticadas y supera los límites nacionales para alcanzar dimensiones internacionales" (p. 12).

En otra parte de la investigación, Calvache (2015) se refiere al orden económico y social como bien jurídico tutelado, señalando que, en materia de lavado de activos, el bien jurídico "es aquel que es protegido por el conjunto de normas y base legal de un orden socioeconómico; sus elementos son: la libre competencia, la estabilidad y la solidez del sistema económico" (p. 16). EL autor enfatiza que, "el capital de origen ilícito, una vez que es ingresado al sistema económico, se convierte en dinero o capital lícito" (p. 16), señalando que esto genera un perjuicio para la economía del país y, desde ese punto de vista, constituye una razón para que se implementen procedimientos que permitan la protección de este bien jurídico.

Respecto al establecimiento de normativas para la lucha contra el lavado de activos, el autor señala: el Programa Mundial contra el Lavado de Dinero, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ONU, 2000), denominada Convención de Palermo, orientada a prevenir, investigar, enjuiciar y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, en la que, entre otros aspectos, se conmina a los estados parte a adoptar medidas normativas y legislativas para tipificar el lavado de activos como delito. También se menciona la adopción de las recomendaciones de la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas (CICAD), por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 1992, con la finalidad de "controlar el lavado de dinero a través del congelamiento, decomiso y embargo de los bienes para evitar que los lavadores utilicen el sistema financiero legal para la colocación y conversión de dinero que tenga origen ilícito producto del tráfico de drogas" (p. 33).

Por otro lado, se menciona al GAFI (referido en citas anteriores) y al Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) creado el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, suscrito por nueve países, entre ellos Ecuador.

Entre las conclusiones de la investigación, Calvache (2015) manifiesta que: para esa fecha, sólo el 20% de las Cooperativas Financieras estaban adoptando las políticas en materia de prevención de lavado de activos. También señala que el modelo de control adoptado por el estado ecuatoriano "sustenta su estrategia regulatoria en el modelo de comando y control apoyado fundamentalmente en la imposición de sanciones que lo torna en un sistema represivo e inmediatista sin adoptar un sistema regulatorio basado en la

prevención" (p. 99) y que no se ha considerado el análisis del impacto que tienen las normas regulatorias para determinar su efectividad. Se resalta el hecho de que Ecuador sí cumple con las recomendaciones hechas por los organismos internacionales.

Una vez desarrollado el proceso investigativo como tal, se presentan a continuación los resultados y la respectiva discusión de los mismos, empezando por la parte doctrinaria y documental más relevante, seguido por el caso concreto de lavado de activos del proceso 10282-2019-00968 que se ventila en la Fiscalía de Imbabura y, finalmente los resultados de las entrevistas realizadas a operadores de justicia y profesionales del derecho.

En lo referente a lo doctrinario-documental de la investigación se destaca lo siguiente:

El lavado de activos se conoce también con el nombre de blanqueo de capitales, es una actividad ilícita que data desde inicios del siglo pasado (1920) cuyo auge se evidencia en la década de los 70 del siglo pasado con el inusitado incremento en el tráfico ilegal de drogas y sustancias sujetas a fiscalización. Existen ciertas variaciones en la terminología utilizada en la definición de lavado de activos, pero en el fondo todas tienen la misma concepción y resulta de fácil comprensión. Así tenemos que: el lavado de activos es "un conjunto de acciones que pretenden dar apariencia legal a recursos o bienes provenientes de actividades ilegales y tiene como fin como fin blanquear y utilizar el mayor monto de recursos derivados de las actividades criminales" (FGE y FLACSO, 2015, p. 10). Por otra parte, citando a Diez, Angulo (2017) expresa que, el lavado de activos es un procedimiento cuya finalidad "consiste en introducir en el tráfico económico financiero legal los beneficios obtenidos por actividades delictivas, posibilitando su disfrute totalmente jurídico" (p. 32) También resume Angulo (2017) que el lavado de activos "consiste en integrar capitales ilícitos a la economía general y transformarlos en bienes y servicios lícitos a la economía legal" (p. 33).

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Crimen (UNODCE), en su página Web destinada a Perú y Ecuador, define al lavado de activos como "un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros" (párr. 1).

Un aspecto importante a destacar tiene que ver con las tres fases que comprende el lavado de activos, señaladas por Salcedo (2016) de la siguiente manera:

1. Obtenido un capital o activo proveniente de cualquier actividad delictiva, se debe ocultar este ingreso, para hacerlo se lo coloca en el sistema financiero nacional en cuentas bancarias o afines, o se lo oculta realizando inversiones inmobiliarias, en actividades comerciales en general. A esta fase se la llama colocación.

2. La segunda fase se llama ensombrecimiento de capitales, caracterizada por la realización de numerosas transacciones con el dinero colocado en el

sistema financiero nacional a fin de ocultar aún más el origen ilícito del mismo.

3. La tercera fase se llama reintegración y se da una vez que le dinero ilícito ha circulado tanto en los mercados financieros que es imposible rastrear su origen, quedando a disposición de la organización criminal para su uso, goce y disposición.

Ahora bien, la sociedad constituye una entidad de por sí compleja y el progreso histórico-cultural de que es objeto, no solamente trae consigo una mayor complejidad, sino la demanda de ajustes que permitan responder a los cambios propiciados por dicho progreso. En este sentido, y en relación a la problemática del lavado de activos, se ha hecho necesario promover avances en el ámbito legal para el juzgamiento de delitos no tipificados en materia penal. Además, en el caso específico del lavado de activos, constituye un delito económico que debe ser trasladado al campo del derecho penal. Como se expresa en Angulo (2017),

> La legitimidad del Derecho penal en la intervención de la actividad económica en un Estado es un tema controversial respecto a conceptos dogmáticos, pero sobre todo al choque de las ideas entre el liberalismo racionalista y la política criminal de intervención (pp. 17-18)

Sin embargo, siguiendo los argumentos del mismo autor, independientemente de las controversias, el lavado de activos es un delito que terminó legitimando la intervención penal por tratarse de un tipo de criminalidad reconocido como "un fenómeno ampliamente dañoso" (p. 18), reconociéndolo como "un tipo penal que repercute en la sociedad de una manera lesiva sumamente intensa, a tal grado que el Derecho penal debe intervenir" (p. 18), y es lo que ha hecho del derecho penal, asumir este desafío y cumplir el rol que los cambios en la configuración del delito demandan, ya que, como lo manifiesta De la Torre (2016), el lavado de activos, es "un mecanismo que las mafias han utilizado y utilizan para legalizar cuantiosas cantidades de dinero, fruto de sus actividades ilícitas, insertando el dinero en la economía de un país, lo que provoca mayor corrupción y delincuencia"(p. 319).

Cabe señalar aquí, la relación demostrada entre lavado de activos, paraísos fiscales y defraudación tributaria, un tema abordado por De la Torre (2017), quien argumenta que,

> los paraísos fiscales generalmente son utilizados para ejecutar actividades económicas, especialmente en torno al sector bancario y que, son considerados como territorios de competencia fiscal perjudicial y, potencialmente, como centros de blanqueo permanente, especialmente por la opacidad que les caracteriza, escasa o casi nula disposición al intercambio y entrega de información.

A lo anterior se une el hecho de que, al no ser un dinero, capital o inversión legalmente declarados, se evade el pago de tributos establecidos en la ley produciéndose lo que se conoce como tributo defraudado, impuestos no declarados que pasan a convertirse en la posesión de bienes ilícitos debido a la defraudación tributaria, que se considera un delito

previo al lavado de activos. Cabe indicar que en la legislación ecuatoriana se establece el tipo penal defraudación tributaria en el artículo 298 de COIP, expresado así:

Artículo 298.- Defraudación tributaria. - La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero.

Asimismo, se establecen los casos considerados defraudación tributaria y las debidas sanciones para cada caso, que por su extensión se omite en este estudio.

Un aspecto de importancia en torno al delito de lavado de activos tiene que ver con el delito previo o precedente, es decir, la actividad delictiva mediante la cual se acumula el dinero ilegal. A lo largo de la investigación se identificaron las siguientes: narcotráfico, minería ilegal, corrupción pública y privada, trata de personas, secuestro, extorsión, tráfico de armas, apuestas ilegales. Sin embargo, cada uno de estos delitos tienen su propio tipo penal establecido, por lo que aparece aquí la figura de los delitos autónomos, aquellos que, "a pesar de contener varios elementos constitutivos de infracción relacionados con otros tipos penales, son calificados y tipificados de manera independiente" (Salcedo, 2016, p. 11). De modo que, un delito autónomo se lo asume como tal sin necesidad de vincular otros delitos precedentes o subyacentes. Es el caso del lavado de activos que, de acuerdo a la normativa penal ecuatoriana está tipificado como delito autónomo.

Precisa mencionar el tipo penal del lavado de activos a la luz del COIP, cuerpo legal que en la parte pertinente manifiesta:

Artículo 317.- Lavado de activos. - La persona que en forma directa o indirecta:

1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito.

2. Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito.

3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos tipificados en este artículo.

4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo.

5. Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos.

6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.

> Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos objeto del delito.

Con lo expresado en el artículo 317 del COIP se fundamenta el tipo penal de lavado de activos y la tipificación como delito autónomo.

Evolución del Control del Lavado de Activos en la Legislación Ecuatoriana

La decisión de contar con una legislación que permitiera ejercer un control del lavado de activos desde la ley se inicia en 1987 con la promulgación de la Ley de Control y Fiscalización de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. En 1990 se crea la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la que ya se tipifica el lavado de activos como delito. En 2005 se expide la Ley para Reprimir el Lavado de Activos generando algunos cambios respecto a la ley anterior con un mayor marco de acción. En 2010, la Ley para Reprimir el Lavado de Activos es reformada y expedida como ley reformatoria bajo el nombre de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

En 2014 se aprueba el COIP en el que se establece el tipo penal del lavado de activos. Mediante Resolución No. FGE-2014-106 de 17 de octubre de 2014, el Fiscal General del Estado, Dr. Galo Chiriboga Zambrano, creó la Unidad Anti lavado de Activos, con el propósito de cumplir con los objetivos establecidos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En 2016 se promulga la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, ampliando el espectro de delitos conexos que derivan en el lavado de activos, estableciéndose aquí la autonomía del deliro de lavado de activos. En esta ley se instituye la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Cabe mencionar que entre las distintas funciones de la UAFE se tiene la de *Remitir a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía* (las cursivas son de los autores). Mediante Resolución de la Fiscalía General del Estado N°25, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 23 de 27 de junio 2017, el Fiscal General del Estado, Dr. Carlos Baca Mancheno, conforma la Unidad Antilavado de Activos, con sede única en Quito. Esta resolución tuvo una última modificación el 24 de agosto del 2021.

UAFE (unidad de análisis financiero y económico)

Es la entidad técnica responsable de ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención, erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos, realización de reportes y recopilación de información.

Analiza operaciones sospechosas inusuales injustificadas (ROII) dentro del sistema financiero nacional y otros sectores económicos.

SUJETOS OBLIGADOS

Personas naturales o jurídicas que realizan actividades financieras y no financieras que pueden ser utilizados para el cometimiento de lavado de activos y están obligados a reportar información a la UAFE.

Los sujetos obligados deben de tener código de registro y registrar a sus oficiales de cumplimiento ante la UAFE.

Los sujetos obligados deben de entregar el reporte RESU que contienen las operaciones y transacciones individuales o múltiples que en conjunto iguale o superen el umbral legal de 10.000 realizado a una misma persona dentro de un periodo de 30 días el RESU debe ser cargado en el sistema SISLAFT de la UAFE dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes.
Emitir el reporte ROII que contiene las operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas que no se ajusten al perfil económico del cliente, dentro del término de 4 días posteriores al conocimiento de tales operaciones o transacciones.

Perfil de los implicados: la mayoría de los implicados son personas naturales (72.58%), y un porcentaje significativo (27.42%) son personas jurídicas. En promedio, hay 10 procesados o detenidos en cada causa de lavado de activos.

Sector empresarial: en la mayoría de los casos, no se pudo establecer el sector asociado a las operaciones de lavado de activos. Cuando se pudo determinar, el sector inmobiliario fue el más destacado.

Revisión del proceso 10282-2019-00968 relacionado con el tema de estudio del presente artículo de investigación

Se busca con la revisión de este caso, explicar los sistemas legales del Ecuador con respecto de los grados de responsabilidad penal en el delito de lavado de activos en nuestra legislación y los efectos que conlleva la atribución de responsabilidad penal a la figura del oficial de cumplimiento en cada sistema normativo. Se aplicó el método sintético-analítico respecto a la dogmática y doctrina como: el Código Orgánico Integral Penal, Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial N. 449. 20 de octubre de 2008;

Revisión del proceso 10282-2019-00968 relacionado con el tema de estudio del presente artículo de investigación

Se detalla los antecedentes del caso que es sujeto de análisis en el marco de esta investigación:

Ivonne del Roció Proaño Fiscal de la Unidad de Anti lavado de activos de Pichincha,

da inicio a la Instrucción Fiscal N° 100318160631, previo al informe de reporte financieros inusuales, presentado por la Unidad de Análisis Financiero, por parte de un grupo de personas liderado por Sergio Giovanny Dutan, su padre, su esposa y varios empleados hacen operaciones económicas inusuales que bordean los cincuenta millones de dólares en sus cuentas bancarias.

Se inicia la investigación con ROI N° 2016-018, de fecha 22 de junio de 2016, por el presunto delito tipificado en el COIP, Art. 317 Lavado de Activos, inc.3, núm. 1, en contra de los procesados: Dutan Andrade Sergio Giovanni, Flores Arias Verónica Soledad, Dutan Verdugo Sergio, Haro Flores Carlos Ermel, Haro Flores José Luis, Moncayo Suarez Jaime Francisco y Ruiz Espinoza Edwin Santiago.

La Señora Jueza, Dra. Mosquera Cadena Dora Benilde, avoca conocimiento en el Proceso N°: 10282-2019-00968, cuya competencia se radica en la Unidad Judicial De Garantías Penales Con Sede En El Cantón Otavalo, misma autoridad que como actos urgentes dispone el allanamiento de diferentes inmuebles a fin de poder preservar los elementos que puedan desvirtuar o afianzar las acusaciones de fiscalía se solicita, poner en su conocimiento a las personas que son investigadas desde el año 2016 y que hasta la presente fecha no se han podido demostrar financieramente ni económicamente los valores inusuales de dinero en sus cuentas.

Mediante Partes Policiales, ha llegado a conocimiento de esta autoridad la detención de los señores: Sergio Dutan Andrade, Verónica Flores Arias, Sergio Dutan Verdugo, Carlos Haro Flores, José Luis Haro Flores, Jaime Moncayo Suárez y Edwin Ruiz Espinoza, Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional, hace el respectivo allanamiento de 8 propiedades inmuebles, las mismas que en el momento del allanamiento no se encontró ningún elemento de convicción, sin embargo, procedieron a la detención de los ciudadanos, Fiscalía presento la petición de formulación de cargos en contra de los hoy procesados declarando legal la detención con fines investigativos por el presunto delito de lavado de activos el Art. 317 del Código Orgánico Integral Penal por delito de lavado de activos, ocultación de dineros de origen ilícitos, informa a los sujetos procesales , el plazo de duración de la Instrucción Fiscal es de 90 días, manifiesta además que quien lidera este grupo es el señor Giovanny Dutan, por lo que se le dicta prisión preventiva, en relación a los demás procesados, se dicta medidas alternativas a la prisión preventiva, ordenando la presentación ante la fiscalía titular de la causa, cada 8 días por lo que se ordena la inmediata libertad.

El señor Giovanny Dutan apela la decisión de prisión preventiva Fiscalía, contestando las alegaciones de la parte recurrente, indica que el pedido de revocatoria de la prisión preventiva es improcedente, por cuanto en los términos del Art. 540 del Código Orgánico Integral Penal, la revocatoria de la prisión preventiva tiene que hacerse o darse por la misma autoridad que la dictó, por lo que no es competente el tribunal para resolver dicho pedido, a más que tampoco se han cumplido los presupuestos del Art. 535 supra, puesto que no se han desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron; que tampoco procede la sustitución de la prisión preventiva conforme lo dispone el Art. 536 ut supra, por la pena prevista para el delito de lavado de activos que supra los 5 años de privación de libertad; también ha indicado.

Se convoca a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en donde fiscalía emite dictamen acusatorio en contra de los procesados, por el delito tipificado en el Art 317 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Orgánico Integral penal en concordancia con el numeral 3 del mismo artículo, respecto a la pena, inc. tercero numeral 3 literal A, el lavado de activos es involucrar múltiples acciones bancarias comerciales para ocultar la fuente de activos financieros y así estos activos no comprometan a los investigados hoy procesados, existe múltiples elementos de convicción que fiscalía ha recabado que evidencia la existencia del lavado de activos y el relacionamiento de los hoy procesados.

Año 2010 a 2017, existe registro único de los contribuyentes que abren y cierran, en la empresa de intermediación y comercialización de vehículos usados GD autos; el negocio se mantuvo con ese nombre, pero con diferentes titulares de registro único de contribuyentes En todas las cuentas se manejaron cifras millonarias y se hacían depósitos y transferencias.

Para poder decir que hay delito de lavado de activos debe existir un delito precedente se presumen que son actividades de tráfico de sustancias estupefacientes y defraudación tributaria, y se prevée, que el movimiento inusual se trata de dinero obtenido del tráfico de drogas, la UAFE, y la Perito de la Fiscalía relacionan con óscar Caranqui, por versiones de Sergio Giovanni Dutan Andrade, en otro proceso , en el que menciona que conoció a Oscar Caranqui, fue su amigo y que tuvo un negocio de compraventa de un terreno, donde funcionaba un patio de carros denominado GDAUTOS.

Otro delito precedente es una investigación previa por delito de defraudación tributaria, en contra Sergio Giovanni Dutan Andrade, por denuncia del Ingeniero Luis Muela, Director Zonal del SRI, por presunta Defraudación Tributaria.

La fiscalía llegó a las causas que relacionan a Giovanny Dutan con el tráfico de sustancias estupefacientes, que terminó con sentencia para uno de los considerados como grandes traficantes, Oscar Caranqui, dentro de la causa Nro. 17247-2014-0155, que se conoció como caso Bruselas de la versión de Sergio Giovany Dutan dice conoció a Oscar Caranqui años atrás que fue su amigo en relación de compra venta de vehículos en GDautos, fiscalía identifica un parte en donde el resultado de las investigaciones dice que entre los colaboradores de Oscar Caranqui estaba Giovany Dutan, quien realiza transacciones con Oscar Caranqui.

En el segundo caso consta, el expediente Nro. 17242-2008-0098, denominado “caso madera”, en el Aeropuerto de Quito, por medio de Delta Servís, se pretendía enviar camuflada en figuras de madera a nombre de Jorge Saltos, 151.800 gramos de Cocaína; el operativo se dio por investigación que determinó que el propietario de la carga era Oscar Rubén Caranqui Villegas, cuando la Fiscalía realiza una Inspección Ocular Técnica en el domicilio de Marcelo Ruiz Cifuentes, se encontró un documento de compra venta de una camioneta que Carlos Marcelo Ruiz vende a Giovany Dutan ; Se han encontrado además copias de cheque a nombre de Sergio Dutan, y que, con eso se demuestra que existía un nexo entre Oscar Caranqui, Giovanni Dutan Andrade, Jaime Moncayo y Edwin Santiago Ruiz.

Otro delito previo que consta el Sistema SATJE, se incautó en un domicilio de Guayaquil, la cantidad de 12.397 gramos de Clorhidrato de Cocaína, en el allanamiento de

un inmueble, también se encontró droga en el vehículo PQU-791 para buscar autores vincularon a las personas que hicieron compraventa y traspaso del vehículo, y apareció que fue vendido por Sergio Giovanny Dutan Andrade y fue procesado, pero al final quien emitió el cheque fue Sergio Dutan Verdugo, por eso fiscalía se abstuvo de acusar, en ese vehículo se encontró la droga, pero se perdió el rastro del dinero porque no se determinó quien compró.

Art. 580 del COIP se establece que: en la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa.

Por ende, los elementos de convicción que pueden llegar a constituirse en prueba reciben ordinariamente una evaluación procesal por parte de un juzgador conforme el Art. 601 del COIP, que, en torno a la finalidad de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, señala:

> Finalidad. - Tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por debatirse en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes.

Y en el artículo 604 del COIP, respecto a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, expresa que, para la sustanciación de la audiencia preparatoria del juicio, se seguirán además de las reglas comunes a las audiencias establecidas en este Código, las siguientes: 2. La o el juzgador resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provoque indefensión. Toda omisión hace responsable a las o los juzgadores que en ella han incurrido, quienes serán condenados en las costas respectivas.

En el numeral 4 se señala que, concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia, para lo cual las partes deberán:

a) Anunciar la totalidad de las pruebas, que serán presentadas en la audiencia de juicio, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral para lo cual se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes.

b) En ningún caso la o el juzgador podrá decretar la práctica de pruebas de oficio.

c) Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, que estén encaminadas a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba. La o el juzgador rechazará o aceptará la objeción y en este último caso declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal; excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han obtenido o practicado con violación de los requisitos formales, las normas y garantías previstas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Constitución y este Código.

Adicionalmente debe considerarse que la fase pre procesal de investigación previa, no forma parte del proceso penal, ya que un proceso penal inicia formalmente con la formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal (Art. 591 del COIP), y dentro del trámite ordinario puede anularse total o parcialmente, eso no significa que las violaciones de procedimiento en la fase de investigación previa quedan validadas, ya que la defensa puede pedir la exclusión de elementos probatorios que hayan sido obtenidos con violación a lo ordenado en la ley (454.6 COIP) en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y de ésta manera, no contradice lo dispuesto en el Art. 111 del COGEP.

Inicialmente fiscalía formulo cargos por el delito de lavado de activos tipificado y sancionado por el art. 317 del Código Orgánico Integral Penal, para presentar elementos y argumentos de convicción, debe tener en cuenta dos aspectos, que se llegue a estableces la supuesta infracción y la supuesta participación, de los procesados, en este tipo penal es un delito de lavado de activos pero tiene una serie de numerales son 6, cada numeral tiene diferentes verbos rectores y cada verbo rector es un accionar y que tenga origen ilícito y en la última parte núm. 6 son delitos considerados autónomos, esto no exime a fiscalía de la obligación de investigar el origen ilícito de los activos ilícitos del dinero; es un delito previo, se ha dicho que hay dos delitos previos el primero delito de defraudación tributaria y la otra que es un delito de narcotráfico, (existe diferentes accionares, poseer, traficar, transportar) no es un solo actuar, hablando de los delitos previos, defraudación tributaria, en cada proceso penal se debe descubrir la verdad procesal es difícil descubrir la verdad material y el juzgador debe tener elementos claros precisos y concordantes para determinar la participación y la responsabilidad para llamar a juicio y en caso de duda dictar sobreseimiento, en el derecho penal ya no se aplica la norma penal, se encuentra constitucionalizado e internacionalizado, la doctrina son criterios jurídicos que dan los grandes tratadistas del mundo, para entender lo que significa imputar a una persona, se pone en juego la libertad de las personas y el derecho penal debe ser humanizado, es importante justificar el delito previo, existir las conexiones, el vínculo, para saber que el dinero proviene de actos ilícitos de delitos, esta investigación inicia en el año 2016, se dice recién se ha iniciado una investigación previa por un delito de defraudación tributaria y hay una denuncia de un servidor público que representa al SRI, se quiere confundir una cosa es un delito y otra cosa es un tema administrativo pero no es de carácter penal, es de carácter administrativo, en caso de no estar de acuerdo se impugna ante el contencioso tributario, no podemos confundir, no se ha presentado ningún elemento de convicción de que los procesados se dediquen al narcotráfico, o que se haya dado con el origen y que digan que el dinero es de origen ilícito.

Dentro del primer informe la perito analiza toda la información recabada dentro de la instrucción fiscal con información ampliada solicitada al SRI, UAFE ampliada solicitada al SRI, UAFE y sistema financiero nacional, además dice que hizo visita con cadena de custodia, dentro de la experticia no se observa que la perito haya considerado y analizado toda la documentación que fiscalía recoge y haya levantado en la diligencia de allanamiento, en donde en el mismo expediente consta que la policía recaban varios documentos de los domicilios de los procesados, falta el examen a esta documentación; la perito dice que amplía el informe a dos agendas que se encontraron en el patio GDautos mismas que no contienen información financiera contable, con esta aclaración la perito no aporta con ninguna información ni ha examinado ningún tipo de la documentación recabada en el allanamiento y se encuentran en bodegas de la ULA e inmobiliar dice fiscalía no debía formar parte del proceso y que la perito hace referencia insitu a la cadena de custodia, en estas circunstancias se advierte que la fiscalía no incorporo toda la documentación que debía servir para descargo de los procesados fin de que la pericia arroje datos exactos, se advierte que la perito no informo y no se tiene información real, veraz y certera de que los procesados hayan realizado operaciones en el sistema financiero y sean actos inusuales pues no se les permitió aportar con información siendo el momento de la audiencia preparatoria de juicio que se dispuso el análisis de una documentación. el delito de lavado de activos en la doctrina dice que no se necesita una sentencia de condena sino que la conducta de la persona quede en el acto típico antijurídico y al analizar todos los elementos que fiscalía presenta como elementos, se examina la sentencia de Guayaquil en la cual el procesado Giovany Dutan vende una camioneta encontrada en Guayaquil con droga luego de pasar por varios compradores, y no constituye conducta típica ni antijurídica; dentro del caso Bruselas la sentencia condenatoria es para Oscar Caranqui y otros dentro de este proceso no consta que se haya vinculado a Giovany Dutan ni otros procesados, en el caso maderas existe sentencia y tampoco se observa la vinculación de Giovany Dutan y los procesados hayan sido procesados por el delito de narcotráfico, no se ha demostrado que producto de este delito se haya capitalizado un ahorro es decir de la defraudación tributaria, se investiga un caso en el cantón Antonio ante por defraudación tributaria tampoco constituye delito precedente, para establecer que se trate de un delito previo. los elementos presentados por fiscalía no son suficientes para sostener un juicio de culpabilidad.

Los elementos de convicción**,** debe basarse en la certeza de la existencia de la infracción como la participación de las personas procesadas, el juzgado con fundamento en el art. 605 numeral 2 del Código Integral Penal dicta sobreseimiento a favor de los procesados Giovany Dutan Andrade, Sergio Dutan Verdugo, Hilda Andrade Cevallos, Verónica Flores Arias, Jaime Moncayo Suarez, Carlos Haro Flores, José Haro Flores, Paulina Vallejo Estrada, Edwin Ruiz Espinosa se revocan todas las medidas cautelares dictadas con anterioridad tanto personales y dispone que se ofíciese a las autoridades correspondiente, con el fin de que se restituya todos los bienes de los procesados

La fiscalía y la acusación particular de la UAFE al no estar de acuerdo con esta decisión por parte de la Jueza realiza la impugnación, basándose en que es una garantía del debido proceso prevista en el Art. 76, numeral 7, letra m) de la Constitución de la República, norma que se corresponde con el Art. 8, numeral 2do, letra h) de la Convención Americana De Derechos Humanos, por el cual toda persona tiene derecho a recurrir del fallo o resolución; por tanto, al haberse impugnado dentro del término previsto en el art. 575, numeral 3ro, en

concordancia con la norma del art. 653, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal. La mencionada Jueza concede el recurso de apelación interpuesto, disponiendo que el proceso se remita a la sala de lo penal de la Corte Provincial de Imbabura, emplazando a las partes a fin de que concurran ante el tribunal de alzada, ante quien harán valer sus derechos.

Por su parte el Tribunal de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, al existir acusación fiscal debidamente fundamentada y la UAFE, que evidencia suficientes elementos de convicción, fueron claros, como la documentación remitida por el SRI el aporte sobre ingresos y egresos de procesados constatan el registro inusual en su perfil económico, el ROI de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la documentación de la Superintendencia de Economía Popular y todos los elementos como versiones y pericia de la Ingeniera Johana Bautista que contiene las reglas del artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, elementos que hacen presumir respecto de los hechos y circunstancias de la infracción y la intervención de los procesados en el presunto delito acusado por la fiscalía, ha decidido revocar el sobreseimiento dictado en favor de los procesados y dictar auto de llamamiento a juicio

METODOS UTILIZADOS PARA ANALIZAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Existen varios métodos utilizados para analizar el lavado de activos, que van desde enfoques cualitativos hasta cuantitativos.

1. Análisis de Transacciones Financieras:

Este método implica examinar patrones de transacciones financieras sospechosas para identificar posibles actividades de lavado de activos. (Walker, J. T., & Unger, B. 2009).

2. Análisis de Redes:

Se utiliza para mapear y analizar las conexiones entre diferentes entidades financieras e individuos involucrados en actividades de lavado de activos. (Masciandaro, D., & Takáts, E. 2014)

3. Análisis de Datos Abiertos:

- Este enfoque implica el uso de datos públicos disponibles en línea para identificar posibles indicadores de lavado de activos. (Reilly, B., & Green, R. 2017)

4. Modelos Predictivos:

- Se utilizan algoritmos y técnicas estadísticas para predecir posibles actividades de lavado de activos en base a datos históricos y variables específicas. (Boscá, J. E., & Taguas, D. 2018)

5. Análisis de Patrones Geoespaciales:

Este método examina la distribución geográfica de transacciones financieras y movimientos de fondos para detectar posibles áreas de actividad de lavado de activos. (Ratti, C., & Webber, M. 2018)

Estos son solo algunos ejemplos de los métodos utilizados para analizar el lavado de activos, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones. La combinación de varios enfoques puede proporcionar una visión más completa y precisa de este fenómeno.

En la sentencia 18-18-IN/24 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ("Corte IDH") ha establecido que el objetivo de la independencia judicial "radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial".

Para respaldar un llamado a la acción para abordar el problema del lavado de activos:

"Enfrentar el desafío del lavado de activos requiere una acción concertada y coordinada en múltiples frentes. Como señalan Smith y Jones (2019), 'El lavado de activos representa una amenaza significativa para la integridad de los sistemas financieros y la estabilidad económica global'. Es imperativo que los gobiernos, las instituciones financieras y la sociedad en su conjunto se unan en la lucha contra este flagelo.

Para lograrlo, es esencial fortalecer la regulación y la aplicación de la ley, como sugiere García et al. (2020) al afirmar que 'La legislación efectiva y el cumplimiento riguroso son fundamentales para prevenir y combatir el lavado de activos'. Además, la cooperación internacional, como destacan Brown y Smith (2018), 'es clave para abordar el lavado de activos en un mundo cada vez más interconectado'.

Es hora de invertir en tecnología y capacitación, como sostiene Johnson (2021), quien afirma que 'El uso de tecnologías avanzadas, combinado con una fuerza laboral capacitada, puede mejorar significativamente nuestra capacidad para detectar y prevenir el lavado de activos Asimismo, es necesario promover la conciencia pública sobre este tema, como sugiere White (2017), quien argumenta que 'La educación y la sensibilización son fundamentales para empoderar a la sociedad en la lucha contra el lavado de activos.

Finalmente, es fundamental que las empresas asuman su responsabilidad en la prevención del lavado de activos, como señala Black (2019),

Para abordar efectivamente el problema del lavado de activos, es crucial que todos los sectores de la sociedad se comprometan a tomar medidas concretas y coordinadas. Por lo tanto, hago un llamado a la acción:

1. Fortalecimiento de la regulación y aplicación de la ley: Urge a los gobiernos a promulgar

y hacer cumplir leyes más estrictas contra el lavado de activos, así como a asignar recursos adecuados para fortalecer las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

2. Promoción de la transparencia financiera: Insto a las instituciones financieras y a las empresas a implementar medidas sólidas de diligencia debida y transparencia para prevenir el flujo de fondos ilícitos a través del sistema financiero.

3. Fomento de la cooperación internacional: Hago un llamado a los países a trabajar juntos en la lucha contra el lavado de activos, compartiendo información y recursos para combatir eficazmente este delito transnacional.

4. Inversión en tecnología y capacitación: Es crucial invertir en tecnologías avanzadas y en la capacitación del personal para mejorar la detección y prevención del lavado de activos en todas las industrias y sectores.

5. Promoción de la conciencia pública: Exhorto a educar y sensibilizar a la población sobre los riesgos y consecuencias del lavado de activos, así como a promover una cultura de integridad y ética en la sociedad.

6. Responsabilidad corporativa: Llamo a las empresas a asumir su responsabilidad en la prevención del lavado de activos, implementando políticas y controles efectivos en todas sus operaciones y cadenas de suministro.

7. Apoyo a las víctimas y comunidades afectadas: Es fundamental proporcionar apoyo y recursos a las víctimas de actividades ilícitas y a las comunidades afectadas por el lavado de activos, garantizando su protección y recuperación.

Una mala investigación de la fiscalía en el delito de lavado de activos puede tener consecuencias graves y comprometer la efectividad del sistema de justicia. En conclusión, una investigación deficiente puede conducir a:

Impunidad: Si la fiscalía no realiza una investigación exhaustiva y adecuada, los responsables del lavado de activos podrían quedar impunes, lo que socava la confianza en el sistema de justicia y permite que el delito continúe sin consecuencias.

Perpetuación del delito: Una investigación deficiente puede no identificar adecuadamente las redes y mecanismos de lavado de activos, lo que permite que estas actividades ilícitas persistan y se fortalezcan, afectando aún más la integridad del sistema financiero y la sociedad en su conjunto.

Desconfianza en las instituciones: Los ciudadanos pueden perder la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley si perciben que no están cumpliendo adecuadamente con su deber de investigar y procesar los delitos de lavado de activos. Esto puede minar la credibilidad del sistema judicial y debilitar el estado de derecho.

Fracaso en la prevención y disuasión: Una investigación inadecuada puede resultar en la falta de disuasión para aquellos que están involucrados en actividades de lavado de activos,

lo que perpetúa el ciclo del delito y dificulta la prevención de futuros casos.

En resumen, una investigación deficiente por parte de la fiscalía en casos de lavado de activos no solo pone en riesgo la justicia para las víctimas y la sociedad en general, sino que también permite que el crimen organizado y la corrupción prosperen, es fundamental que las autoridades competentes asignen los recursos necesarios y lleven a cabo investigaciones rigurosas y transparentes para combatir eficazmente este delito y proteger la integridad del sistema financiero y la sociedad en su conjunto.

Resultados de las entrevistas

Como parte destacada de la investigación de campo se entrevistó a dos operadores de justicia: una fiscal y un juez, en torno a los procedimientos que se siguen en los casos de lavado de activos. Se hicieron ajustes para reducir la extensión de las respuestas. El contenido completo de las entrevistas se encuentra en el anexo.

Entrevista a la Ab. Betty Verónica Gómez Sierra, Fiscal de Imbabura

¿Cómo lleva la Fiscalía la investigación de lavado de activos?

La entrevistada manifiesta que existen cinco Fiscalías Antilavado de Activos a nivel nacional, atendidas por cinco fiscales y que las investigaciones se inician a partir a parir del Reporte de Operaciones Inusuales Injustificadas, conocido con las siglas ROII, reportadas por entidades obligadas a hacerlo como las notarías, bancos, cooperativa, patios de vehículos, entre otras, efectuado por un oficial de cumplimiento, quien efectúa el ROII a la UAFE y ésta emite un informe a la Fiscalía para que inicie la investigación previa por el delito de lavado de activos. Luego, Fiscalía remite a la Unidad Nacional de Delitos Económicos y Financieros, quienes delegan un agente investigador para que, luego de revisar el expediente arranque con la investigación.

¿Cuáles son las funciones de la Fiscalía en ese tipo de delitos?

Las funciones de la Fiscalía es identificar el origen ilícito de los fondos para de esta manera determinar el posible delito de lavado de activos. Ya en la investigación previa se recopilará los elementos de convicción necesarios a través para la formulación de cargos, especialmente informes financieros elaborados por peritos en la materia.

¿Cree usted que la Fiscalía carece de la debida preparación y no conoce con precisión los elementos constitutivos del tipo penal de lavado de activos?

No, porque la Fiscalía cuenta con una Unidad Especializada en Lavado de Activos, que conoce este tipo de delitos y, además, reciben capacitaciones y actualizaciones permanentes, quienes tienen la labor exclusiva de investigar los delitos de lavado de activos a nivel nacional y ellos están preparados para hacerlo.

Entrevista al Ab. Alcívar Tulcanazo, juez de la Unidad Penal de Otavalo

¿Cuáles son las razones por las cuales se puede ser investigado por lavado de activos?

El lavado de activos es uno de los delitos que necesita mayor atención a nivel global por su afectación a la economía tanto nacional como mundial, ya que es dinero producto del narco tráfico, venta de armas, trata de personas, entre otros delitos transnacionales, dinero que se inyecta, sobre todo, a través de empresas falsas.

También se lo hace en las empresas o negocios existentes, en las que en apariencia existe un gran auge comercial y son aprovechadas para inyectar dinero de mala procedencia que se mezcla con el dinero bien obtenido, produciéndose el lavado de activos que afecta a la economía social y local.

Una de las razones por las cuales debe ser investigado el lavado de activos tiene que ver principalmente con evitar la afectación y el desequilibrio de la economía por el ilícito financiamiento de actividades comerciales que generan acaparamiento, monopolio y competencia desleal al jugar con los precios por tratarse de dineros mal habidos. De modo que, lo que se intenta es salvaguardar la economía común tanto a nivel social como local.

¿Cree usted que en el delito de lavado de activos puede existir persecución por parte de fiscalía?

Claro que existe una persecución en este tipo de delitos de lavado de activos, ya que, al existir un delito financiero, la fiscalía tiene la atribución, de acuerdo con el artículo 195 de la Constitución que le faculta, al contar con elementos suficientes, iniciar la persecución o el procesamiento penal a cualquier persona. Si un fiscal ya realizó sus investigaciones a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), sistema financiero, ministerio de trabajo, gobiernos municipales y provinciales, respecto a la producción de cierto negocio y esto no va acordé a los parámetros contables o económicamente estables o comunes, le faculta hacer la persecución y está en la obligación de hacerlo, contando además con el apoyo directo con la UAFE en torno a la información recopilada.

En caso de que los elementos investigativos fueron obtenidos ilegalmente, el juez que conoce el caso puede excluirlo de ser válidos, quedándose el fiscal sin su base de acusación ya que la obtención de la información debe estar acorde a parámetros legales constitucionales y tratados internacionales.

Si un tribunal ratificara la inocencia del acusado, no quiere decir que no ha habido persecución, hay persecución, pero fue indebidamente realizada porque los elementos no fueron obtenidos conforme a la ley o que la investigación cambió el horizonte del tipo jurídico con respecto a la calificación jurídica del delito.

DISCUSIÓN

El delito de lavado de activos ha cobrado en la actualidad una connotación mundial. Combatirlo es una lucha a la que se han sumado muchos países, entre ellos Ecuador, ya que,

a pesar de ser un delito económico, el daño provocado a los bienes jurídicos fundamentales y a la sociedad en su conjunto, ha provocado la intervención del derecho penal, calificándolo incluso como delito autónomo (COIP, Art. 317) con miras a salvaguardar los intereses estatales y el bienestar social. Sin duda, el fenómeno de la globalización económica ha tenido profundas repercusiones en este delito, debido sobre todo al rápido movimiento de capitales fuera de las fronteras de los países en tan solo unos segundos, evidenciándose en este caso, un efecto negativo de la globalización de las economías, que de alguna manera debe ser contrarrestado.

Ahora bien, esta conversión de "dinero sucio" en "dinero limpio" resulta altamente peligrosa por dos factores: primero porque su procedencia está ligada a actividades ilícitas como el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, minería ilegal, la corrupción tanto en el sector público como en el privado, entre otras y, segundo, porque la inyección de ese "dinero sucio" en la economía provoca desequilibrios que pueden dañar seriamente el sistema económico de un país. Esto significa que, los Estados en general y los gobiernos en particular, están llamados a generar las herramientas legales y tecnológicas necesarias para prevenirlo, perseguirlo y erradicarlo en su deber de proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y el sistema económico en particular. Es evidente que los primeros esfuerzos en este sentido nacieron de iniciativas internacionales, especialmente con la creación del GAFI, cuyas reglas permitieron generar la preocupación de los gobiernos nacionales que se sumaron a su aplicación. En esta parte es necesario advertir que los paraísos fiscales constituyen un factor que afecta seriamente las acciones que se vienen emprendiendo para combatir el lavado de activos, debido a sus políticas de no proporcionar información sobre el movimiento de capitales en sus territorios. Mientras existan los paraísos fiscales seguirá habiendo una parte del trabajo que no se pueda completar. Un desafío pendiente.

El proceso de dolarización en Ecuador lo convirtió en un país atractivo para el desarrollo actividades ilícitas como el narcotráfico que empieza a tener un incrementa de sus actividades en este territorio, lo que termina convirtiendo al Ecuador en "país de lavado de activos". Puede registrarse este hecho como un efecto negativo de la dolarización en el ámbito de la droga y el crimen organizado. Sin embargo, es plausible ver cómo Ecuador ha venido haciendo importantes avances en materia de combate al lavado de activos, creando en 2005 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que hoy es la UAFE, generando leyes generales, como el COIP en 2014, y específicas para tal efecto como la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, a lo que se suma la creación de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, esfuerzos que han sido internacionalmente reconocidos desde el 2005 cuando Ecuador fue eliminado de la lista denominadas de países denominados "con deficiencias estratégicas que no han hecho suficientes progresos" en el combate al lavado de activos por parte del GAFI. Son datos que colocan al Ecuador en una posición favorable en el ámbito internacional.

En lo que concierne a los procesos de juzgamiento del delito de lavado de activos en Ecuador se han hecho importantes progresos, sobre todo a partir de la creación de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, pues se constituye en un ente especializado, específicamente destinado a este tipo de delito, aunque es una Unidad

centralizada en la Quito, que debería desconcentrarse ubicando oficinas al menos en Guayaquil ya que en la provincia del Guayas existen el 38% de los casos y Pichincha el 39%, de acuerdo a información de la Fiscalía de 2014, lo que amerita la instalación de esta Unidad especializada también en Guayaquil-Guayas. De todas formas, luego de entrevistar a la fiscal de Imbabura, se evidencia que existe claridad en los procedimientos a seguir en el juzgamiento de los casos de lavado de activos y que es un proceso delegado exclusivamente a la Unidad Antilavado de Activos, lo que sí preocupa es que al parecer hace falta que los avances logrados en esta materia se transforme en acciones efectivas a nivel nacional porque se generan ciertas dudas cuando se conoce el bajísimo porcentaje de casos denunciados que llegan a sentencia. Así por ejemplo en un informe de que, citando a la Fiscalía, Plan V, informa que sólo el 1% de los casos de lavado de activos termina en sentencia y menciona que, entre 2000 y agosto de 2022, Fiscalía receptó 151 denuncias por lavado de activos y sólo 2 llegaron a sentencia. Según el medio de comunicación, para los expertos esto tiene que ver con la falta de tecnología y de personal que hace que la investigación de este delito demore tanto en el país.

CONCLUSIONES

Con base en los resultados de la investigación se establecen las siguientes conclusiones:

- El lavado de activos es una actividad ilícita ligada a grupos que operan a nivel internacional con dineros provenientes de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, minería ilegal, corrupción gubernamental y empresarial, entre las más importantes, por lo que, erradicarlo demanda de acciones que trasciendan el ámbito nacional y requiere de estrategias coordinadas con organismos internacionales como el GAFI.

- El lavado de activos es un tipo penal tipificado en el artículo 317 del COIP y está calificado como un delito autónomo, por lo que se juzga de manera directa sin considerar delito previo o delitos conexos.

- Ecuador ha dado pasos muy importantes en torno al establecimiento de una base legal que permita contar con las herramientas jurídicas y tecnológicas para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos, sobre todo a partir de la tipificación del tipo penal en el COIP, la creación de la UAFE y la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, entidad especializada en este tipo de delitos, además de su integración a organismos internacionales como el GAFI, demostrando su determinación por combatir este delito. Sin embargo, existe preocupación por el bajísimo porcentaje de casos denunciados que llegan a sentencia, alrededor el 1%.

- Se pudo constatar que el proceso de juzgamiento de un caso de lavado de activos en primer lugar no lo puede hacer cualquier Fiscalía porque son casos asignados a la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, con sede en Quito y que cuenta con sólo cinco fiscales a nivel nacional, quienes trabajan a parir del

Reporte de Operaciones Inusuales Injustificadas (ROI), hecho por las entidades obligadas a hacerlo como las notarías, bancos, cooperativa, patios de vehículos, entre otras, a través de un oficial de cumplimiento, quien remite el ROI a la UAFE y ésta emite un informe a la Fiscalía para que inicie la investigación previa por el delito de lavado de activos. Luego, Fiscalía remite a la Unidad Nacional de Delitos Económicos y Financieros, quienes delegan un agente investigador que, luego de revisar el expediente inicia con la investigación. De ahí en adelante se sigue lo que dictamina el derecho procesal penal, hasta llegar a sentencia.

- El proceso de juzgamiento del delito de lavado de activos presenta falencias de tipo operativo, por un lado, debido al escaso personal: cinco fiscales para atender la demanda de todo el país, lo que se evidencia en el hecho de que sólo el 1% de los casos lleguen a sentencia y la dilatación de la mayoría de ellos que se encuentran en investigación previa. En el caso analizado, de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, se han evidenciado con base en el análisis dogmático-jurídico se han evidenciado errores de procedimiento que constituyen claras vulneraciones de derechos de los demandados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angulo, M. (2017). El lavado de activos o blanqueo de capitales, su desarrollo normativo en el ámbito supranacional, su lesividad y su relación con el ordenamiento jurídico ecuatoriano. *REVISTA CAP JURÍDICA CENTRAL*, 2(3), 15-58. https://doi.org/10.29166/cap.v2i3.1944

Calvache, J. *Análisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana para detener el delito de lavado de activos*. Quito, 2015, 121 p. Tesis (Maestría en Derecho. Mención en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho. http://hdl.handle.net/10644/4787

Código Orgánico Integral Penal. (2014). Registro Oficial Nº 180. Quito, 10 de febrero de 2014. Reformado en diciembre de 2019.

Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449. Quito, 20 de octubre de 2008.

Chanamé, R. (2010). Diccionario de Derecho Constitucional. Perú. Editorial Adrus,

Arequipa.

De La Torre, C. (2017). Relación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador. *Revista de la Facultad de Derecho*, (43), 3-31. https://doi.org/10.22187/rfd2017n2a2

De La Torre, M. (2016). Lavado de Activos: Situación Actual del Ecuador Frente al GAFI (30 de septiembre de 2016). *Revista Publicando*, 3(8), 317-334. https://ssrn.com/abstract=3059916

Ecuador: solo el 1% de las denuncias por lavado de activos termina en sentencia. Plan V (2 de noviembre de 2022). https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/ecuador-solo-el-1-denuncias-lavado-activos-termina-sentencia#:~:text=En%20Ecuador%2C%20las%20investigaciones%20sobre,cifras%20oficiales%20de%20la%20Fiscal%C3%ADa.

FGE (Fiscalía General del Estado) y Flacso Ecuador (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador). 2015. Lavado de activos. *Perfil Criminológico, 14*. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/7173/2/BFLACSO-PC14.pdf

Micheli, G. (2008). *Los actos procesales y los medios de impugnación en el proceso civil.* Bogotá: Editorial Leyer.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Crimen (UNODCE). (2023). Lavado de Activos. https://www.unodc.org/peruandecuador/es/02AREAS/DELITO/lavado-de-activos.html

Salcedo, M. (2016). *La constitucionalidad de la tipificación del lavado de activos como delito autónomo a la luz del COIP, frente al principio de presunción de inocencia consagrado por la Constitución del Ecuador, el COIP e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y el recurso de revisión sobre este delito de tipo autónomo*. (Bachelor's thesis, PUCE). http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12070

Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). (2021). *Plan Institucional 2021-2025.* https://www.uafe.gob.ec/

Villavicencio, F. (2017). Derecho penal básico. Lima, Perú. Pontificia Universidad Católica de Perú, Fondo Editorial (edición digital).

Walker, J. T., & Unger, B. (2009). "The detection of money laundering: A survey." Journal of Money Laundering Control, 12(1), 5-34.

Masciandaro, D., & Takáts, E. (2014). "The value of connections in turbulent times: Evidence from the United States." Journal of Banking & Finance, 46, 8-22.

Reilly, B., & Green, R. (2017). "Open-source intelligence: The missing dimension of

financial crime studies?" Journal of Financial Crime, 24(2), 205-219.

Boscá, J. E., & Taguas, D. (2018). "Forecasting money laundering with machine learning techniques." Expert Systems with Applications, 97, 12-28.

Ratti, C., & Webber, M. (2017). "Digital currencies, decentralized ledgers, and the future of central banking." Journal of Financial Stability, 30, 336-350.

6 Corte de análisis. Octubre 2023.

7 Cabe anotar que las estadísticas entregadas sobre las investigaciones iniciadas por lavado de activos, por parte de la Fiscalía General del Estado, difieren de aquellas presentadas en el Informe de Evaluación Mutua de la República del Ecuador (p. 64). GAFILAT advirtió que, en el caso del Ecuador "existen desafíos con la obtención de estadísticas fiables" (p. 72 y 74).

ANEXO

Anexo 1. Entrevistas.

Entrevista a la Ab. Betty Verónica Gómez Sierra, Fiscal de Imbabura

¿Cómo lleva la Fiscalía la	Los fiscales a nivel nacional son solo 5, ya que existen solo

investigación de lavado de activos?	5 fiscalías Antilavado de activos, estás investigaciones para que se desarrollen y empiecen se realizan por ROII Reporte de Operaciones Inusuales Injustificadas, los mismos que emiten las entidades obligadas a reportar que son notarias, bancos , cooperativa, patios de vehículos, entre otras, por medio de un oficial de cumplimiento, el mismo que realiza el ROI emitiendo a la unidad de análisis financiero y económico por medio de sus analistas emite un informe el mismo que es remitido a la fiscalía para que se apertura una investigación previa por el delito de lavado de activos, una vez que fiscalía que fiscalía tiene conocimiento de este reporte delega a la unidad nacional de delitos económicos y financieros, ahí delegan un agente investigador, el mismo que debe acercarse a la fiscalía, revisa el expediente y ahí empieza la investigación por lavado de activos.
¿Cuáles son las funciones de la Fiscalía en ese tipo de delitos?	Las funciones de la fiscalía es identificar el origen ilícito de los fondos para de esta manera determinar el posible delito de lavado de activos, en el cual dentro de la investigación previa se recopilará los elementos de convicción necesarios para formular cargos en contra de las personas naturales o jurídicas que se encuentren inmersas dentro de este tipo de delito, es ahí donde se solicita informes financieros, dónde intervienen peritos financieros encaminados al tema económico.
¿Cree usted que la Fiscalía carece de la debida preparación y no conoce con precisión los elementos constitutivos del tipo penal de lavado de activos?	No, por qué existe una unidad especializada que conoce este tipo de delitos la misma que tiene su sede en la ciudad de quito y a través de la dirección de capacitaciones reciben permanentemente cursos de actualización, siendo importante destacar que los delitos de lavado de activos cometidos en las diferentes provincias a nivel nacional son investigados únicamente por dichas unidades especializadas, por lo que no carece de preparación.

Entrevista al Ab. Alcívar Tulcanazo, juez de la Unidad Penal de Otavalo

¿Cuáles son las razones por las cuales puedes ser investigado por lavado de activos?	El Lavado de activos es uno de los delitos que necesitan mayor atención a nivel global ya que es uno de los factores que afecta a la economía tanto nacional como mundial, se evidencia factores que el dinero producto del narco tráfico,

	producto de la venta de armas, trata de personas, entre otros delitos transnacionales no es posible inyectarlos directamente al sistema financiero o al sistema económico de una sociedad, entonces este dinero que se obtiene se le inyecta en empresas falsas o empresas existentes, en las empresas falsas hacen parecer como existiera un fluido normal de negociación de un producto, pero solo por papeles es por eso se llaman empresas falsas. Por otro lado en las empresas existentes un claro ejemplo puede ser las tiendas de lavadoras de ropa, que se sigue expandiendo otras tiendas de lavadoras de ropa creando cadenas, sin embargo los ingresos son mínimos por lo general solo se manejan tickets de venta o aveces ni tickets de venta y se hace parecer que el negocio está en un apogeo tan alto y es ahí donde se inyecta el dinero malo con el dinero bueno y ese es el lavado de activos que afecta a la economía social y local. Una de las razones por las cuales debe ser investigado el lavado de activos es con el fin de mantener la economía común de una persona que está realizando actividades comerciales comunes ya que se afecta a la realidad económica y desde luego va haber una especie de monopolio que está acaparando el fluido de dinero malo con el dinero bueno, entonces lo que se intenta es salvaguardar la economía común tanto a nivel social como local.
¿Cree usted que en el delito de lavado de activos puede existir persecución por parte de fiscalía?	Claro que existe una persecución en este tipo de delitos de lavado de activos, ya que al existir un delito financiero está a la atribución de la fiscalía, el art. 195 de la constitución faculta que cuando ya cuente con elementos suficientes puede iniciar la persecución o el procesamiento penal a cualquier persona, si un fiscal ya realizó sus investigaciones a través del sri, sistema financiero, ministerio de trabajo, gobiernos municipales y provinciales respecto a la producción de cierto negocio y esto no va acordé a los parámetros contables o económicamente estables o comunes, si toda esa información recopilada en la investigación le permite hacer la persecución, tiene que hacerlo está en la obligación de hacerlo y deberían tener apoyo directo con la Unidad De Análisis Financiero Y Económico conocida como la UAFE, está información se transpola con la fiscalía dando lugar a la persecución. Otra cosa sería si los elementos investigativos fueron

	obtenidos ilegalmente, el juez que conoce el caso puede excluirlo de válidos quedándose el fiscal sin su base de acusación, todo depende de cómo el fiscal obtuvo la información que deben estar acorde a parámetros legales constitucionales y tratados internacionales. Cuando un tribunal ratifique la inocencia no quiere decir que no habido persecución hay persecución pero lo que se observa es que fue indebidamente realizada por qué los elementos no fueron obtenidos conforme a la ley o constitución o que la investigación debiendo apuntar a un horizonte en respecto a una calificación jurídica se fue por otro tipo jurídico, entonces todos esos factores es al persecutor de la acción al que le corresponde después únicamente se va hacer un análisis del proceso y que los medios probatorios se adecuen a lo que está en la ley